



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

67952/2018

Autos: “NANCY RIVERO Y RICARDO TERAMO S.H. Y OTROS c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .-

VISTO:

El recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en autos, cuyo traslado ha sido contestado por la parte actora;

Y CONSIDERANDO:

En orden a la procedencia formal del remedio federal articulado, cuadra señalar que el mismo ha sido interpuesto en tiempo oportuno y de acuerdo a las pautas ordenadas por la Acordada 4/2007.

Que la recurrente funda su recurso, especialmente, en la interpretación legal realizada por el Tribunal para la resolución del caso.

Que, al fundamentar el recurso, argumenta la quejosa que la decisión objeto del recurso reviste carácter de sentencia definitiva; funda su recurso en la interpretación legal realizada por el Tribunal para la resolución del presente caso, en la doctrina de la arbitrariedad y en supuestos de gravedad institucional.

Que respecto de la arbitrariedad del decisorio impugnado por la accionada, dicha doctrina “tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso (art. 18, Constitución Nacional), exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias efectivamente comprobadas en la causa” (CSJN Fallos 339:1066; 338:623; 330:499; 329:3761). Ello así, en las presentes actuaciones no se advierte un caso tal, dado que las razones expuestas en el fallo dictado por este Tribunal brindan sustento suficiente que descartan el empleo de dicha doctrina.

Que los argumentos que esgrime al respecto la quejosa no logran abrir la instancia extraordinaria, pues sólo evidencian discrepancias con el criterio empleado por el Tribunal en la apreciación de los diversos elementos de juicio incorporados al proceso y con la solución final adoptada, lo cual no basta para configurar la tacha de arbitrariedad alegada. Además, tiene dicho el Máximo Tribunal, que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida y exige, entre otros requisitos, para la habilitación de esta última



instancia excepcional, que debe probarse una violación concreta a las garantías constitucionales y no la mera disconformidad del recurrente con el mérito que efectuó el Tribunal Juzgador (Fallos: 331:477; 329:3949; 324:4300; 323:262, 488; 322:792, entre muchos otros). Extremo éste que ha sido incumplido desde que la recurrente no ha sido concreta en los agravios restantes.

Que, en otro orden, la impugnante manifiesta que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas y decididas en autos excede el mero interés particular y atañe al de la comunidad, configurando un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria (Fallos: 247:601; 255:41; 290:266; 292:229; 293:504; 307:770; 307:919; 317:1076; 324:533; 341:939; 342:287; entre muchos otros).

Que, atento a ello, cabe señalar que, en principio, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional que permite habilitar esta vía excepcional, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado en la sentencia del Tribunal, no autoriza la vía intentada. Tampoco logra demostrar la quejosa que la cuestión invocada tiene virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden institucional o el fondo de las instituciones nacionales o grave afectación del principio de división de poderes o las instituciones fundamentales que el recurso extraordinario tiende a tutelar o las instituciones básicas de la Nación o el fondo de algún instituto jurídico en conflicto [SAGÜÉS, Néstor P. (2018), Compendio de Derecho Procesal Constitucional, 3º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, Argentina, p. 267 y sgtes.].

Corresponde, entonces, desestimar por insustancial la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia.

Por ello, el Tribunal **RESUELVE:** 1) Denegar el recurso interpuesto por la demandada; 2) Imponer las costas a la vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.); 3) Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en la suma de \$61.124 (sesenta y un mil ciento veinticuatro pesos) cifra equivalente a la cantidad de 2 UMA, conforme Acordada de la C.S.J.N. N° 36/2023 del 01/12/2023, Res. SGA N° 3369/2023 del 04/12/2023 y art. 19 de la ley 27.423. Al monto establecido deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93; Fallos: 316:1533); 4) Notifíquese; 5) Protocolícese; y 6) Oportunamente, devuélvase.

La Dra. Dorado no firma por encontrarse de licencia (art. 109 RJN).

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE
JUEZ DE CÁMARA

WALTER FABIÁN CARNOTA
JUEZ DE CÁMARA
(SUBROGANTE)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

GRP

